

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 46 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 20° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-6101-2019  
CARATULADO : MUÑOZ/CONSEJO DE DEFENSA DEL  
ESTADO/FISCO DE CHILE

Santiago, veinticinco de Marzo de dos mil veintidós

**VISTOS.**

A folio 1, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en calle Sótero del Río N° 326, oficina 1104, Santiago, en representación de don Gustavo Muñoz López, ingeniero comercial, con domicilio en Los Jardines N° 749, comuna de Ñuñoa, quien viene en deducir demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por el residente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, en virtud de los hechos y el derecho que expone en su demanda.

A folio 5, consta la notificación personal del demandado.

A folio 6, se contestó la demanda.

A folio 16, se evacuó la réplica de la parte demandante.

A folio 18, se evacuó la réplica de la parte demandada.

A folio 23, se recibió la causa a prueba, modificándose por el auto de folio 31 y fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que rolan en autos.

A folio 60, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO.**

**PRIMERO.** Que, la parte demandante expone que su representado, ha sido reconocido por el Estado de Chile como víctima calificada de prisión política y



«RIT»

Foja: 1

torturas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo Nº 1.040 de 2003, con el número 16.202.

Expone, que su representado proporcionó el siguiente relato acerca de lo vivido en dictadura militar:

*“Fui detenido el día 12 de septiembre de 1973 en el edificio de la Corporación de Fomento a la Producción –CORFO-, lugar donde trabajaba, junto a otros profesionales funcionarios. Las oficinas principales de la CORFO, fueron asaltadas por tropas del Ejército de Chile, armados como si fueran a enfrentar a un enemigo externo también armado. Recuerdo que colocaron una bomba en la puerta principal, que da a la calle Moneda. Entraron como locos disparando sin motivo, contra los 50 funcionarios que estábamos en esas dependencias. 12 mujeres se encontraban dentro del grupo. Los militares nos obligaron a tendernos boca abajo, caminaron sobre nuestros cuerpos y nos golpearon con la culata de sus fusiles, preguntando por las armas, y por el paradero de don Pedro Vuskovic, en ese entonces, presidente de CORFO. Transcurridas varias horas de allanamiento y violencia, nos bajaron a la calle Matías Cousiño, nos formaron en fila y nos cortaron el pelo con bayoneta al principio, y con tijeras después.*

*Después de algunas horas, nos trasladaron al Ministerio de Defensa. Nuevamente nos obligaron a tendernos boca abajo y comenzó una vez más, el "paseo" por sobre nuestros cuerpos con frecuentes culatazos. De hecho, recibí uno muy fuerte en el oído izquierdo. De repente se escuchó una voz potente que ordenó sacar prisioneros al azar y torturarlos para obtener información. Después, nos llevaron a un subterráneo, allí nos amarraron las manos a la espalda, agrupados de 5 en 5. En esa incómoda posición nos dejaron por el resto de la noche.*

*A la mañana siguiente nos sacan del subterráneo, fuimos interrogados por tres grupos de civiles, uno tras otro, y todos ellos realizaron las mismas preguntas, que eran de identificación de cada uno de nosotros. Un oficial del Ejército, que todo hacía suponer que era del SIM, se acercó a algunos que conocía en CORFO Central, y les comunicó que no nos preocupáramos porque esta situación muy pronto cambiaría. Al poco rato, la misma persona volvió con las cédulas de identidad de nosotros, venían ordenados por orden alfabético y comenzó a nombrar las personas que podían retirarse. Solo alcanzó a salir Álvarez Patricio, el segundo que nombró no pudo salir, pues lo retuvieron y bajaron con él. Luego se produjo una discusión con el oficial que estaba entregando los carnet y subieron todos juntos discutiendo. Al oficial supuestamente del SIM no lo volvimos a ver.*



*El día jueves de esa semana, apareció otro oficial, quien comenzó a nombrarlos entregándole el respectivo carnet e indicándole donde tenía que ubicarse, formándose dos grupos. Como yo andaba sin carnet, me preguntó molesto si me estaba haciendo el "leso", a lo que respondí que mi carnet se había quedado en casa. Me mandó ubicarme en el grupo más numeroso. En el grupo más pequeño estaban Guillermo Sáez, Alberto Corbalán, Marcelo Concha, entre otros que no recuerdo. Después supimos fueron enviados a camarines del Estadio Nacional y luego a Pisagua. Los restantes fuimos trasladados en buses al Estadio Chile.*

*Al llegar fuimos formados en una columna en el callejón entre el Estadio y los locales comerciales que dan a la Alameda. El Comandante que nos recibió comenzó a preguntarnos por nuestra militancia política. Al cabo del quinto consultado, dijo; "así que todos son independientes, yo tengo un equipo que los va a "hacer cantar". Paralelamente, veíamos como en camillas cargaban unas ambulancias del Ejército, con personas totalmente tapadas con frazadas grises. En ese momento pensé, que no saldríamos vivos. Ya dentro del Estadio nos ubicaron en un pasillo del subterráneo, formados mirando a la pared. Custodiados todo el tiempo por militares jóvenes (conscriptos). Momentos antes, al pasar por el pasillo, la columna de prisioneros se detuvo unos instantes, y quedé frente a un camarín que estaba con la puerta abierta, y observé que había una persona sentada en la banca del medio. Con su cabeza inclinada, su rostro estaba irreconocible y se veía muy maltrecho. De repente giró lentamente su cabeza, y vi el otro lado de su rostro que estaba menos golpeado, y pude reconocer al compañero Víctor Jara. Todo esto fue en un breve espacio de tiempo, pues enseguida nos hicieron avanzar.*

*Cuando la columna se detuvo en el lugar que ellos determinaron, comenzaron los culatazos a diestra y siniestra. A algunos nos sacaron de la columna y nos trasladaron a un espacio frente a unos baños, y los oficiales nos golpearon con linchacos en todo el cuerpo. Ese mismo procedimiento me lo aplicaron varias veces. Además, por noche me llevaron a una especie de gimnasio no muy grande, y me amarraron a un pilar. Una vez vendado, procedieron a disparar balas de fogueo, o quizás balas verdaderas muy cerca de mí. Estos simulacros tenían por finalidad, afectar mi psiquis. Esto se repitió durante seis noches. A la séptima noche, estando en la misma posición, vimos que estaba pasando el Comandante que nos recibió de llegada. Yo hablé con fuerza: ¿Me permite una palabra Comandante?*



*Él se detuvo y preguntó, ¿qué pasa? Respondí que los prisioneros de guerra, exigíamos un trato digno, agregué que durante siete días no nos habían dado alimento alguno y no nos habían permitido dormir. Luego él se acercó y me preguntó militancia, mi nombre y profesión, yo contesté, “soy partidario del Gobierno del Dr. Salvador Allende, di mi nombre y mi profesión. El respondió que era el primer hombre, de los casi 10.000 que están ahí, que dice la verdad. Los otros se declaran independientes, o sea “inocentes palomas”. Siguió parado frente a mí. Me inquirió, “tú como economista ¿cómo explicas el desabastecimiento?” Le respondí: “Si me lo permite comandante, nuestro Gobierno ha aumentado la producción en casi todos los sectores, ha hecho importaciones mucho más que los gobiernos anteriores, y además, ha realizado una redistribución del Ingreso con lo que se ha aumentado el poder de compra del pueblo”. Casi imprudentemente le pregunté si la junta Militar tendría como modelo el brasileño o el peruano. El respondió que no sabía, pero que personalmente se inclinaba por el peruano. Los compañeros que estaban solo escuchando, comenzaron a intervenir, lo que convirtió esa situación en un hecho insólito, pero que tuvo la virtud de cambiar nuestro destino. El Comandante ordenó que nos dieran comida y nos permitieran dormir. Aprovechando el momento, le pedí unas colchonetas que estaban amontonadas en el mismo pasillo en que nos encontrábamos. Finalizado el dialogo, el Comandante y su séquito prosiguieron su camino.*

*Más que el hambre y los golpes, por lo menos para mí, lo más angustioso era no haber dormido en seis días. Como no alcanzaban las colchonetas, las pusimos a lo largo. De tal forma que pudiésemos apoyar las espaldas. Al poco rato, sin embargo, fuimos despertados por un oficial, que no habíamos visto antes, y nos despertó diciendo “ya cabritos nos vamos al cielo”. Con “El cielo” se refería a la cancha y las galerías, las que estaban completamente llenas. Solo había espacio en el tercer nivel, en donde los soldados decían que estaban los “jerarcas”, que eran los prisioneros más públicos. (sic)*

*Nosotros quedamos ubicados en un tramo pequeño de asientos de la galería que no alcanzó para todos. De tal forma que algunos nos acostamos en el suelo. Al día siguiente fuimos trasladados en buses particulares. Hincados frente a cada asiento, apoyando la cabeza en los respectivos asientos. Me di cuenta que íbamos por la calle Salvador Sanfuentes, osé levantar la cabeza para ver la casa donde vivía mi madre (en ese momento se me apretó el corazón). Por ello recibí culatazo en la cabeza.*

*Llegamos así al estadio nacional, donde fuimos ubicados en la escotilla 12 que está a una o dos escotillas antes de la torre norte. Allí quedamos*



«RIT»

Foja: 1

*prácticamente en libre plástica. En esta escotilla habíamos más o menos 200 prisioneros. Un grupo de alumnos de la Universidad Técnica, nosotros y los que estaban por toque de queda. Dentro del grupo de los jóvenes universitarios, había uno que todo el tiempo estuvo acostado, y botaba sangre por la boca. Como no se podía levantar le llevábamos la comida.*

*Uno de esos días, fuimos llevados a interrogatorio y nos condujeron a las tribunas bajo la marquesina. Estuvimos todo el día y toda una noche, con mucho frío.*

*A mediados del mes de diciembre, el Mayor nos reunió y nos comunicó que podíamos salir en libertad. Salí, y rápidamente fui a llamar a mi esposa. Pedí un teléfono en un almacén que estaba ubicado por Pedro de Valdivia al llegar a Grecia, pero nadie contestó. Me preocupé mucho pues no había tenido noticia alguna de mi familia. De manera que me fu caminando hasta la casa de mi madre. Al verme no me reconoció, creyó que era el gasfíter que estaba esperando. La verdad es que estaba irreconocible, con 18 kilos menos. Tenía un color amarillo en piel; el color morado producto de los golpes, se había puesto con el pasar de los días, amarillo.*

*Afortunadamente, allí estaban mis tres hijos, junto a mi madre. Ella también me comentó que mi señora iba todos los días a las puertas del Estadio a esperar mi salida o a recabar alguna noticia sobre mí.*

*Me gustaría consignar que producto del maltrato físico que viví en prisión, mi columna Vertebral (lumbares 4 y 5) y mi mano izquierda quedaron en muy mal estado, y son dolencias que hasta el día de hoy me recuerdan los momentos que pasé privado injustamente de libertad. Años más tarde, me operé de la mano izquierda, debiendo costear con mis propios recursos la intervención quirúrgica.*

*En el plano económico, debí soportar periodos de cesantía y exilio en Argentina y Noruega. Puedo señalar que durante 10 años trabajé en el cargo de Gerente de Planificación Financiera del Grupo Económico "Husa Hoteles" o también conocido como grupa del Banco Español.*

*En efecto, a mediados de julio de 1986 tuve que escapar a Argentina, ya que la CNI ya estaba siguiendo mis pasos y rondando mí casa. Esa misma noche fue allanada con gran destrucción.*

*En Argentina fuimos muy bien tratados, no tuvimos problemas. Desgraciadamente esto duró poco tiempo, porque tuvimos que salir de nuevo. Habían pedido mi extradición desde Chile. Justo en momentos, estaba trabajando*



«RIT»

Foja: 1

en mi profesión como gerente de 2 empresas, de un mismo grupo (una de cerámica y la otra de pretensados) con un sueldo de US\$ 3.500 para empezar y a partir de julio de US\$ 5.000. Esto era a principios del mes de mayo, justo cuando en Argentina había una amenaza de golpe de Estado, los “cara pintada” se habían acuartelado.

A comienzos de ese mes de mayo, llegamos a la lejana Noruega, país que nos brindó una cálida acogida.

En este país no pude trabajar en mi profesión por cuanto no logré dominar el idioma. Con ocasión del curso de aprendizaje del idioma, las profesoras y luego la dirección de asuntos estudiantiles, me mandaron a hacer una audiometría (dos veces). Ambas dieron por resultado que tenía severos daños en mis oídos, que implicaban un severo daño en la “sintonía fina”.

Las Autoridades Noruegas Encargadas de Refugiados querían que aprendiera el idioma para que pudiera trabajar en mi profesión. Por lo que me matriculaban en cursos de noruego, de economía o de empresas. No permitían que trabajara en cualquier actividad. Decían que era un gran desperdicio para el país y desde luego para mí.

A fines de 1990 comencé los preparativos de mi retorno, esperando como quedaría mi caso, al aprobarse las modificaciones legales.

Como el resultado no incidió de manera importante, decidí de todas maneras regresar a mi país, a sabiendas que iba ser detenido en el aeropuerto y me pasaría un tiempo encarcelado.

Efectivamente me detuvieron en el aeropuerto y pasé aproximadamente 9 meses privado de libertad con firma mensual por 2 años, pero la Justicia Militar se las ingenió para alargar ilegalmente ese tiempo de firma, a 6 años y 8 meses.

Después de ese episodio, en julio de 1993 logré un trabajo en la ciudad de Concepción, en un pequeño grupo de 7 empresas con el cargo de Gerente de Administración y Finanzas del pequeño Holding. Mi remuneración en pesos históricos era de cerca \$4.000.000.

Esto duró hasta que me accidenté el día 14 de agosto de 1997.

Al cabo de 2 años me intervinieron para realizar una fenolización y me jubilaron por invalidez parcial.



«RIT»

Foja: 1

*Así llegamos hasta el año 2001, época en que fui contratado por la Comisión Bicameral del Congreso de la República Dominicana, seleccionado y con la “no objeción” del BID para el cargo de Gerente de Administración y Finanzas del Programa de Reforma y Modernización del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas (similar a nuestra Contraloría) de República Dominicana. Por cuestiones reglamentarias del ese país, los contratos no podían exceder de 18 meses. En resumen, mi contrato completo 50 meses, con una remuneración promedio de US\$6.500.*

*Es fundamental para mi destacar los periodos en que pude, pese a mis circunstancias, conseguir un trabajo acorde a mi nivel de formación y experiencia laboral. Pues de estos periodos se desprende de manera consecucional, y mediante un simple ejercicio aritmético, el tiempo que no tuve empleo, es decir, el tiempo en que no puede proveer recursos económicos a las personas máspreciadas de mi vida, a mi familia, a mi señora, a mis hijos. Todos ellos cargaron (y siguen cargando) con la cruz que puso sobre mis hombros la dictadura militar, la prisión política y la tortura. Lo que me tocó vivir afecto de esa manera a toda mi familia, y el Estado debería reparar todo ese daño”. Acá terminaría el relato de su representado.*

Refiere, que entre los fundamentos de hecho que sustentan esta demanda de indemnización por daño moral, se encuentran los daños físicos y materiales que sufrió y el daño moral directo derivado de a lo menos, las siguientes circunstancias que rodearon el hecho fundamental del Golpe de Estado y que en mayor o menor medida se dieron en este caso particular: a) Daño Mental; b) Amenazas; c) Incomunicación; d) Persecuciones; e) Exoneración Laboral; f) Negativa de acceso a la información; g) Inseguridad; h) Presiones y daños psicológicos; i) Alteraciones del sueño; j) Neurosis de angustia, con secuelas de enfermedades psicosomáticas; k) Aislamiento Social; l) Pérdida de oportunidades, en particular de empleo, educación y prestaciones sociales; m) Otras secuelas en el seno de la familia, como separaciones forzosas de largo tiempo; n) Derechos Humanos conculcados en toda su amplitud.

Añade, que entre el 12 y el 13 de septiembre del año 1973, se habilita el Estadio Nacional, que fue en definitiva el centro de detención más grande que existió en esta Región -Metropolitana-, llegando a tener unos 7.000 detenidos al día 22 de septiembre, según estimación de la Cruz Roja Internacional. De ese número, la misma fuente estima que entre 200 a 300, eran extranjeros de diversas nacionalidades. Este lugar estaba al mando de un Oficial del Ejército, y hasta allí fueron trasladadas personas provenientes de todos los lugares de Santiago,



Foja: 1

detenidas en circunstancias y con características muy diversas. Como bien deja entrever el relato de nuestro mandante, los detenidos en el Estadio Nacional dormían en los camarines y en el salón de la torre, lugares que carecían de camas, con excepción de las dependencias habilitadas para mujeres, que disponían de colchonetas. Algunos organismos internacionales humanitarios, posteriormente donaron frazadas, las que en todo caso fueron manifiestamente insuficientes para el alto número de personas privadas de libertad en ese lugar. Los detenidos permanecían en un régimen de incomunicación, por cuanto no estaban autorizadas las visitas de familiares o abogados, y en general de personas provenientes del exterior. A las familias de los prisioneros, sólo se les permitía llevarles vestuario y alimentación. Las personas pasaban la mayor parte del día sentadas en las graderías del Estadio, por donde se paseaba una persona encapuchada reconociendo a militantes de izquierda, los que eran separados del resto de los detenidos. Años más tarde se logró establecer que ese encapuchado era un ex militante del Partido Socialista (Juan Muñoz Alarcón, “el encapuchado del Estadio Nacional”) quien colaboró con los servicios de seguridad del régimen militar, los que abandonó en el año 1977, fecha en que concurre a un organismo de derechos humanos a dar su testimonio. El cuerpo sin vida de Juan Muñoz Alarcón fue encontrado en un sitio eriazo en la comuna de La Florida, con múltiples heridas de arma blanca, el 24 de octubre del año 1977.

Se tiene evidencia de la práctica de torturas y malos tratos a los detenidos del Estadio Nacional, por ejemplo, en el recinto de la enfermería que en algunas oportunidades se utilizó para esos fines; también se sabe de simulacros de fusilamiento y otros métodos inhumanos. En general, los detenidos eran sometidos a constantes e intensos interrogatorios. La Cruz Roja Internacional da cuenta en su informe de diversas visitas efectuadas al Estadio Nacional entre septiembre y octubre de 1973, que "diferentes detenidos se quejaron de malos tratos y de torturas, en el momento de la captura y durante los interrogatorios. Los delegados y delegados médicos del Comité Internacional de la Cruz Roja (de siglas CICR), han podido constatar evidencias de torturas psicológicas y físicas en muchos detenidos. De este modo describe el sitio web memoria viva ([www.memoriaviva.com](http://www.memoriaviva.com)), el recinto deportivo donde el demandante vivió los peores horrores de su vida.

Respecto al derecho señala en primer lugar, que los hechos relatados se encuadran en un crimen de lesa humanidad.

Explica, que los antecedentes previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa





«RIT»

Foja: 1

humanidad según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998.

Cita a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha establecido que “resulta una exigencia previa determinar la fuente u origen de la acción impetrada por los actores [...] lo anterior tiene su fundamento en la existencia de un ilícito y las normas pertinentes, conducirán necesariamente a razonar acerca de la identidad y naturaleza del delito “contra la humanidad o de lesa humanidad”, tal como se ha calificado la infracción penal en cuestión por la doctrina penal nacional e internacional” (Cfr. I. Corte de Apelaciones de Santiago, 16.11.06, “Ruz y otro con Fisco de Chile”, Rol N° 4.464-01, Considerando N° 2.)

En segundo lugar y respecto a la Responsabilidad del Estado, señala que el artículo 38, inciso 2, de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.

Menciona que la Excelentísima Corte Suprema ha sentenciado que: “la responsabilidad del Estado por actos de la administración [...] emana de la naturaleza misma de esa actividad estatal, en cuanto organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas acciones que debe desarrollar en el ámbito de las funciones que les corresponde llevar a cabo para el cumplimiento de los fines y deberes reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política, para lo cual debe hacer uso de todas las potestades y medios jurídicos y materiales que ella le otorga, lo que hace que las distintas responsabilidades que puedan causar esas acciones, se sometan a normas y principios de la rama del derecho público”. (Cfr. E. Corte Suprema, 26.01.5, “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, Rol N° 3.354-03, Considerando N° 11.)

Sostiene que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, y todas ellas -cuando menos- son normas propias del ámbito del derecho público.



«RIT»

Foja: 1

En el caso “Caro con Fisco”, señala que la Corte Suprema ha sentenciado: “que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se ha consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República no indica cuál es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4 del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado.” (Cfr. E. Corte Suprema, 19.10.5, “Caro Silva con Fisco de Chile”, Rol N°4004-2003, Considerando N° 6.)

Añade , por otra parte, en el caso “Albornoz con Ortiz y Fisco” se refuerza la misma idea, esto es: “que, tal como lo ha decidido anteriormente esta Corte, la responsabilidad del Estado por los daños que causen los órganos de su administración enunciada en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración, es de derecho público y de carácter genérico, por emanar de la naturaleza misma de su actividad en el ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo para los fines que le cometen la Constitución Política y las leyes, para lo cual debe hacer uso de las potestades, medios y acciones materiales conducentes a ellos.” (Cfr. E. Corte Suprema, 13.12.05, “Albornoz con Ortiz y Fisco de Chile”, Rol N° 4006-2003, Considerando n°19).

Luego, argumenta que para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan la presente demanda, resulta insoslayable remitirse al Capítulo I de la Constitución Política de la República sobre las Bases de la Institucionalidad. Allí el constituyente desarrolla los principios basales desde donde se estructura todo el sistema institucional. Así, el artículo que da inicio a nuestra Carta Primera en su inciso 4 prescribe que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”. En concordancia con lo anterior, el Art. 5 reafirma -en su inciso 2- que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.



La conjunción de ambos preceptos resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano. (Cfr: Cea, José Luís. Derecho Constitucional Chileno. Tomo I. Ediciones Universidad Católica de Chile. 2002. Pág. 210).

De este modo, las disposiciones reseñadas en conjunto con los Artículos 6 y 7 de la Constitución, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que como ha quedado en evidencia, emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Insiste que, este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual el Estado de Chile -por cierto- forma parte, mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (Art. 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derecho esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Expone que todo lo anterior, esto es, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la



responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

De allí, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 17, IIDH, 1993. Pág. 25). Se trata en consecuencia de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Así las cosas, señala que el Código Político reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia a través del artículo 5, inciso 2, que sanciona e incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie. En igual sentido, el Art. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Por último, el artículo 19, N° 20 de la Carta Fundamental indica que “la Constitución asegura a todas las personas la igual repartición de las cargas públicas”. Aquí se consagra la idea básica según la cual nadie está obligado a soportar una carga que no haya sido establecida por la ley, ni aun en pro del bien común, como lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Respecto a la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, señala que el estatuto de daños contenido en el Código Civil, se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica



Foja: 1

y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. La diferencia entre uno y otro sistema de responsabilidad es evidente. Por el momento basta con recordar que: “es claro que el perjuicio causado a un particular por otro o por el Estado en cuanto sujeto de relaciones privadas, es diverso al perjuicio que se le puede causar a un particular por una actuación ilícita y dañosa de un Estado con relación a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana.” (Cfr. Nash, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 2004. Pág. 23).

Cita pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y añade que, se cumple con exponer ante esta judicatura un conjunto de razones de texto que nos llevan a sostener porqué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes: 1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, ya de entrada nos parece que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado -cuestión, por cierto, inimaginable en los tiempos de Andrés Bello- destinada a exterminar a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del Art. 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste -“secuestro calificado”- el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional; y, 2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (Art.2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (Art.2321); edificios en ruinas (Art.2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (Art.2326 y Art. 2327). Demás está decir que la regla del Art. 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. De la misma manera, aunque existe una norma que parece más pertinente a este asunto concreto –el caso de quien dispara armas de fuego de



«RIT»

Foja: 1

manera imprudente (Art.2329, N°1)- con todo, dicha regla también es inadecuada para resolver casos de violaciones intencionales, masivas y sistemáticas a los derechos esenciales de un sector no menor de habitantes del Estado.

Respecto a la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, explica que la materia de que trata la presente causa, quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas-, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

En efecto, en toda sociedad democrática y respetuosa de la libertades de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona -derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos y por los N° 1 y 7 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental- constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Por su parte, la citada Convención Americana -tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio por la vía del artículo 5 inciso 2, de la Constitución Política- señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención.

Añade que, si bien es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se encuentra establecido en el Artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, al disponer que: “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: [...] c) los principios generales del Derecho reconocido por las naciones civilizadas”. [Tales] principios generales del Derecho [...]



## «RIT»

Foja: 1

reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos. (Cfr. E. Corte Suprema, 14.10.2009, “López con Fisco de Chile”, Rol N° 5570-2007, voto disidente del Ministro Sr. Sergio Muñoz Gajardo, considerando N° 18.)

Al respecto, hace presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -haciendo suyo el razonamiento fijado por la Corte de La Haya desde los albores del Siglo XX- ha establecido que: “es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado “incluso una concepción general del derecho”, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez. Indemnización compensatoria. [Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos], Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C, N° 7. Párr. 25-26).

Por lo anterior, resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano (del cual, Chile, por cierto, es parte) trae aparejada la obligación de reparar el mal causado. En esta materia la norma rectora es el Art. 63 del Pacto de San José. (Cfr. I. Corte de Apelaciones de Santiago, 18.01.06, “Marfull González con Pinochet Ugarte”, Rol N° 37.483-2004, Considerando N°18.)

Por lo tanto, en Chile -dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano- la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derechos humanos de alguna persona tendría que ser la misma: reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber: el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros. (Cfr. Nikken, P. “El concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, I.I.D.H., Costa Rica, 1994. pp. 15-17.)



Hace presente también, que sobre el citado Artículo 63 de la Convención Americana, también se ha dicho que: “ese precepto acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. (...) la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (*restitutio in integrum*), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, el tribunal internacional debe determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer la indemnización que compense por los daños ocasionados. El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la obligación de reparar. Esta queda sujeta en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) al derecho internacional.” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Masacre plan de Sánchez”. Reparaciones. [Art. 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie N° 116. Párrs. 52-53).

Afirma que tal es la conclusión que fluye de una revisión somera de la extensa reglamentación internacional sobre la materia. Ya en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario el Artículo 3 de Convenio IV de La Haya relativo a las “Leyes y costumbres de la guerra terrestre” (de 1907) dispone la obligación de las Altas Partes contratantes de pagar una indemnización en caso de violación de sus normas. Idéntica concepción recogen los Convenios de Ginebra de 1949 ratificados por Chile el año 1951, particularmente en los artículos 68, relativo al trato de los prisioneros de guerra y 55, que versa sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra, así como en el artículo 91 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Así también cabe mencionar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de *ius cogens*. (Cfr. E. Corte Suprema 13.12.2006, “Caso Molco”, Rol N° 559-2004. Considerando N° 19). En fin, vale reparar en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Decreto Supremo N° 144





## «RIT»

Foja: 1

publicado el 1o de Agosto de 2009, que en su Art. 75 (sobre reparaciones a las víctimas), establece que: “[...] La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”.

En este mismo orden de ideas, expone que nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de los normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, que en su Principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales al establecer: “[...] La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional; c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y, d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante.”

A la luz de todo lo dicho hasta aquí, concluye que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible en virtud del Principio IV de dicho cuerpo legal según el cual: “[...] Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las



«RIT»

Foja: 1

violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.”

Por último señala que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61° Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Allí se lee -en el Principio 23 sobre restricciones a la prescripción- que: “La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.”

Expone en resumen: el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales sobre el *jus in bello*.

Afirma que así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los derechos humanos declarando que: “[...] conforme se ha señalado en el presente veredicto, en autos se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delitos de “lesa humanidad”, calificación que no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción - por el transcurso del tiempo - de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado.” (Cfr. E. Corte Suprema 21.01.2009, “Episodio Tormen”, Rol N° 3907-2007, Considerando N° 30). Vemos pues, la concreción de los principios (informadores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos) de congruencia y progresividad así como la interpretación e integración de sus normas según el ya citado principio *pro homine*.

Finaliza citando una serie de Jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, sobre casos de Responsabilidad del Estado por delitos de lesa



«RIT»

Foja: 1

humanidad y que han desechado las excepciones de pago y de preterición legal hechas valer por el Estado de Chile como argumentos para no indemnizar a los familiares de las víctimas.

A continuación, señala el Máximo Tribunal de República ya ha tenido oportunidad de conocer este tipo de demanda de indemnización de perjuicios por las actividades y hechos constitutivos de las violaciones de los Derechos Humanos en Magallanes e Isla Dawson, y de los campos de concentración y centros de detenciones y torturas en Magallanes, con ocasión del recurso de casación en el fondo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, en contra del fallo pronunciado por la Tercera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 17 de noviembre de 2014, que confirmó, a su vez, en todas sus partes la sentencia dictada el día 7 de enero de 2013, por 18° Juzgado Civil de Santiago. Afirma que la preclara sentencia de la Excma. Corte Suprema resolvió, en definitiva, rechazar el recurso de casación en el fondo promovido por el Fisco de Chile, haciendo primar por sobre la normativa de orden civil y privado, los tratados internacionales que Chile ha ratificado y se encuentran en vigor, como ocurre con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros mencionados y analizados en los párrafos anteriores.

Respecto al daño provocado y al monto de la indemnización, señala que en este caso, existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivió el demandante. Añade que esto es indudablemente un daño moral, el cual, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado.

Indica que por daño moral, se entiende aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.

A continuación hace un análisis de la conceptualización de daño moral en la doctrina chilena y la jurisprudencia



Añade que respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Cita al efecto, sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema -de fecha el 8 de Noviembre de 1944- que, en lo pertinente, declara que “una de las razones que justifican en derecho la indemnización por el daño moral, es el efecto de la disminución de la capacidad de trabajo, la depresión de salud o de las energías, fenómenos naturales y ordinarios que, por ello, no necesitan ser especialmente probados, ya que la comprobación de su realidad va incluida en la existencia misma de la desgracia, que para el demandante -pariente cercano de la víctima- importa el delito o cuasidelito cometido en la persona de ésta”, RDJ, Tomo XLII, sec. 1, página 392). En el mismo sentido se halla aquella otra sentencia, también dictada por el Máximo Tribunal (con fecha 28 de Junio de 1966) que, en atinente, establece que “Probada la muerte de esos hijos en las trágicas circunstancias conocidas y el grado de parentesco, queda probado el daño” (RDJ, Tomo LXIII, sec. 1, página 234).

Agrega que en el mismo sentido ha fallado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia del 9 de Agosto de 1960 (RDJ, Tomo LVII, sec. 4, página 229) y en fallo del 22 de Agosto de 1990. En esta última sentencia el Tribunal de Alzada de Santiago, en relación con la prueba del daño moral, señala que éste “no requiere acreditación porque es obvio el sufrimiento que a una madre le provoca el fallecimiento de su hijo, y en la especie se encuentra establecido el vínculo parental (Gaceta Jurídica, N° 122, sent. 4, página 72) y más recientemente el 1 de Julio de 1997 (RDJ, Tomo XCIV, sec. 2, página 79).

Por su parte, la Ilustrísima Corte de San Miguel ha mantenido un criterio similar al sentenciar que “Las lesiones físicas y mentales a una persona producen un sufrimiento en ella misma y a los familiares más cercanos. Tal daño no requiere de prueba y en todo caso debe ser indemnizado por quien lo haya ocasionado, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos, debiendo hacerse al respecto una apreciación equitativa y razonable por el Tribunal (8 de Agosto de 1989, RDJ, Tomo LXXXVI, sec. 4, página 73.)

Prosigue citando jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, y añade que idéntico criterio al de la dogmática y la práctica judicial chilenas, se halla a nivel de la jurisprudencia internacional.



«RIT»

Foja: 1

Explica que en la actualidad ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos -tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria- no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que (dicho padecimiento) “resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tortura, agresiones y vejámenes (...) experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Moiwana”. Reparaciones. Sentencia de 15 de junio de 2002. Serie C N° 124. Párr.195; “Caso Gómez Palomino”. Reparaciones. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C N° 136. Párr. 132; “Caso Blanco Romero y otros”. Reparaciones. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C N° 138. Párr. 132; “Caso Masacre de Mapiripán”. Reparaciones. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C N° 134. Párrs. 283 y siguientes; “Caso Masacre Pueblo Bello”. Reparaciones. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C N° 140. Párr. 255; “Caso López Álvarez”. Reparaciones. Sentencia de 1o de febrero de 2006. Serie C N° 1141. Párr. 201, letra b; “Caso Baldeón García”. Reparaciones. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C N° 147. Párr. 130).

Expone que después de todo lo dicho hasta aquí, es comprensible que un demandante experimente cierta dificultad al momento de proponer ante la judicatura alguna cifra exacta que haga las veces de reparación integral del mal causado, porque es un daño verdaderamente irreparable.

No obstante, los órganos encargados de la administración de justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que estos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que aspiran.

Por ello, es que solicita se condene al Fisco de Chile al pago de una suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) a don Gustavo Muñoz López, a título de indemnización por el daño moral que se le ha causado como consecuencia directa de los crímenes cometidos en contra de su persona, en manos de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que esta judicatura determine en justicia. Esta cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.



«RIT»

Foja: 1

Afirma que la cifra aquí propuesta no es producto de la improvisación, ni menos de un capricho o arbitrariedad sino que se ajusta a la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales en estos temas.

A las consideraciones acerca del daño moral expresadas, agrega en el plano de los daños materiales o patrimoniales que el daño surge como condición de la Responsabilidad Extracontractual, de forma tal que la pretensión de Indemnización sólo nace cuando el daño se ha manifestado. La doctrina ha definido al daño como toda pérdida, disminución, o menoscabo que se sufre en una persona o en sus bienes, concepto que se ha extendido a todo menoscabo de cualquier interés cierto y legítimo de la víctima.

De esta manera, se ha establecido como principio general en materia de Indemnización de Perjuicios, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2314 y 2329 Código Civil, que esta comprende todo tipo de daño, de forma tal que la indemnización sea íntegra, es decir, genere una equivalencia entre el daño causado y la indemnización pagada.

Explica que si bien el artículo 2314 del Código Civil no señala los tipos de daños que darán derecho a una indemnización de perjuicios, ya que sólo contiene una referencia genérica a la obligación de indemnización, debe ser interpretado en armonía con el artículo 1556 del Código en estudio, el cual no obstante su ubicación, permite ampliar su regulación al ámbito extracontractual y precisar que dentro del concepto de daño se comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante; el primero, señala, corresponde a la pérdida o menoscabo efectivo producido en el patrimonio o bienes de una persona como consecuencia de un acto u omisión ilícita civil. Se caracteriza por ser un daño cierto y actual; el Lucro Cesante es todo aquel dinero que se dejó de percibir y al que se tenía legítimo derecho. En efecto, de acuerdo a lo señalado por la Jurisprudencia de nuestro país, el Lucro Cesante comprende los Intereses de capital en que se avalúa o estima el monto real y efectivo del perjuicio causado.

Señala que, el Daño Emergente que se demanda, dice relación directa con las secuelas físicas que hasta el día de hoy debe soportar don Gustavo Muñoz López, pues ha tenido que incurrir en diversos tratamientos y operaciones a lo largo de estos años. Por este concepto solo será demandada la suma de \$3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos), correspondiente al valor de la operación de su muñeca derecha.



«RIT»

Foja: 1

En segundo lugar, el Lucro Cesante, debe ser calculado sobre la base de las remuneraciones que dejó de percibir, tal como lo señala en el relato transcrito en la demanda.

Expone, que con posterioridad al Golpe de Estado, sólo tuvo dos trabajos en Chile. Uno, en el Grupo HUSA, durante 10 años y el segundo, en el grupo Calderón y Abusleme, en la ciudad de Concepción, durante 6 años o 72 meses. En este último se desempeñó principalmente como Gerente de Administración y Finanzas de la empresa matriz.

Por su parte, en República Dominicana, trabajó por más de 4 años, como Gerente de Administración y Finanzas del Programa de Modernización y Reforma Institucional reporta al BID y a la Comisión Bicameral del Congreso.

Afirma que teniendo en consideración lo anterior, los periodos de cesantía serían: Entre el 11 septiembre de 1973 al 31 noviembre 1976 (3 años con 4 meses o 40 meses); entre el 2 de enero de 2002 al 17 de septiembre de 2002 (9 meses); y entre el 15 de junio de 1999 al 31 de enero de 2001 (19 meses)

Añade que los periodos de cesantía en el exilio fueron: En Argentina, entre el 14 de julio 1986, al 23 de abril 1987 (9 meses); en Noruega, entre el 23 de abril de 1987, al 2 de enero de 1992 (57 meses).

La suma de los meses sin percibir remuneración da un total de 134 meses.

Indica que sobre la base de una remuneración promedio de US\$ 6.500 mensuales (en valores históricos), que recibió el actor durante los periodos que si trabajó, según acreditará, multiplicado por los 134 meses que no recibió remuneración, nos da la suma \$609.700.000.- (seiscientos nueve millones setecientos mil pesos), suma que es demandada por concepto de lucro cesante.

Solicita en definitiva, condenar al demandado a pagar a don Gustavo Muñoz López, la suma de \$813.200.000.-, que comprende los daños morales, por la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) y también los patrimoniales – lucro cesante, por la suma de \$613.200.000 (seiscientos trece millones doscientos mil pesos), que ha padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado y ya relatados en este libelo pretensor, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el tribunal en justicia considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización



«RIT»

Foja: 1

que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

**SEGUNDO.** Que, en su contestación, la demandada señala que el actor interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por daño moral, daño emergente y lucro cesante, solicitando la suma total de \$813.200.000.-, más reajustes e intereses desde la fecha de interposición de la presente demanda y costas de la causa, señalando que su representado fue detenido el 12 de Septiembre de 1973, en su trabajo en la Oficina de la CORFO, fue trasladado hasta el Estadio Chile y luego al Estadio Nacional, recuperando su libertad a mediado del mes de Diciembre de 1973.

Añade que fue reconocido como víctima de prisión política y tortura en el Informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech” e invoca como fundamento jurídico de su acción dirigida en contra del Fisco de Chile, diversas disposiciones de la Constitución Política de 1980; la ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, la Convención Americana de Derechos Humanos; y, general, las disposiciones del complejo normativo denominado “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, y una recopilación de fallos sobre la materia, todo lo cual configuraría a su entender, una responsabilidad extracontractual imprescriptible del Estado.

En cuanto a sus excepciones, alegaciones y defensas, opone en primer lugar la **excepción de reparación integral** por haber sido ya indemnizado el demandante.

Refiere que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior- y desde- lo que ya es común considerar; el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así





Foja: 1

pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otro lado, no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal, el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la Ley 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Prodigue relatando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volverá producirse”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego



«RIT»

Foja: 1

derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.”

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la Comisión, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y al a consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial buscada por el proyecto”. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual del Estado”. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Prosigue señalando que, asumida esta idea reparatoria, la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En este sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a.) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b.) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y



«RIT»

Foja: 1

c.) Reparaciones simbólicas.

Mediante estos tres tipos de reparaciones, afirma que se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de Justicia Transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones permitirá verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Continúa su explicación, señalando que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Expone que es necesario destacar, que en la discusión legislativa de esta norma se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras, otros abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig)

b) Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

c) Bonos: la suma de \$41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992, y;

d) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888 - asignada por medio de la Ley 19.123.-

e) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000.-

En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, y tal como se indicó en la historia de la Ley 19.123, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se valore para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.



«RIT»

Foja: 1

Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Señala que, como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Indica que, en lo tocante al caso que nos ocupa, cabe señalar que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley 19.992 y sus modificaciones.

La ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Adicionalmente, cabe consignar que los demandantes recibieron en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

Indica que conforme acreditará en la etapa procesal pertinente, el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

En este sentido, a la fecha de esta contestación, y según lo informado por el Instituto de Previsión Social, el demandante figura calificado como víctima de Prisión Política y Tortura en el segundo informe emitido por la Comisión Valech en Febrero de 2005, por lo que le asiste derecho a los beneficios de reparación dispuestos en las Leyes N°s 19.992 y 20.874.

El total de lo percibido por el demandante corresponde a los siguientes montos, según se indica en la Constancia emitida por el Instituto de Previsión Social:

Pensión de Reparación Ley 19.992 A 02/2005 al 05/2019: \$ 28.234.913.-



«RIT»

Foja: 1	
Aguinaldos:	\$433.175.-
Aporte Único Reparatorio (Ley 20.874):	\$1.000.000.-
TOTAL A LA FECHA:	\$ 29.666.088.-
PENSION VITALICIA:	\$211.055.-

Refiere a continuación, que la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892.-16.- Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad



«RIT»

Foja: 1

Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Adicionalmente, refiere que parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor - siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;



Foja: 1

b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, iconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los Derechos Humanos tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” en esa ciudad; y el “Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Insiste que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas



«RIT»

Foja: 1

por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Así las cosas, tanto las indemnizaciones demandadas como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no procediendo por ello ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo “Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, de 2002, Rol 4753-2001, ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”

En el mismo sentido, cita sentencia de la Excm. Corte Suprema, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013<sup>17</sup>, que reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos.

Añade, que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que “la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra párr. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior -prosigue la sentencia- el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial (...)

En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.





En el documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law Tools for Post-conflicts States) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. De este modo, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

Añade que en la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Concluye señalando que en atención a que las acciones interpuestas en autos están basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que acompañará en su oportunidad, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor de la presente causa.

En segundo lugar, deduce la excepción de **prescripción extintiva**, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo



«RIT»

Foja: 1

dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas éstas, se rechace la demanda, en todas sus partes.

Indica que, conforme al relato efectuado por el actor, la detención ilegal, prisión política y torturas que sufrió ocurrió el 12 de septiembre de 1973 hasta el mes de diciembre del mismo año.

Entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 10 de mayo de 2019, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio de lo anterior y en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles opuestas en autos, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Argumenta que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles: “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”.

Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”.

Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.



«RIT»

Foja: 1

Efectivamente, las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2o, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1°, del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido.

Explica, que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

De esta manera, los planteamientos doctrinarios anteriores permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta



«RIT»

Foja: 1

inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Hace presente, que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

Advierte que es de público conocimiento, que la Excelentísima. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, dictó con fecha 21 de enero de 2013 sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

En dicha sentencia, el Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1°) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2°) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

3°) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común,



«RIT»

Foja: 1

que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia;

Agrega además, que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por su parte, lo que solicita se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos

Prosigue su defensa, señalando que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de la misma, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.



«RIT»

Foja: 1

Finalmente, en relación con las alegaciones expuesta por el actor, en cuanto que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señala que se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Señala que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar-tal como lo ha reconocido la Excelentísima Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la Imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria,

En relación a esta Convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha



«RIT»

Foja: 1

del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.

Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Afirma que este planteamiento, ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país.

En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133- 06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas y lo mismo aconteció en la sentencia dictada por el mismo tribunal superior, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007. Añade también otros fallos en el mismo sentido.

Insiste que, no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Con el mérito de lo expuesto insiste que deberá rechazarse la demanda indemnizatoria por encontrarse prescritas la acción civiles deducida.



«RIT»

Foja: 1

En **subsidio** de las defensas y excepciones precedentes, opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas, en la que se **reclama el excesivo monto de \$813.200.000.-**

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Refiere que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Advierte que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, las cifras pretendidas por los demandantes como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de





«RIT»

Foja: 1

Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Cita al efecto, sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que ha resuelto en materia similar a la de autos que para fijar el quantum debe acudir al Principio de Prudencia que conduce a la proporcionalidad, Ingreso Corte 6891–2013.

Respecto al Daño Emergente, por el cual el actor demanda la suma de \$3.500.000.- consecuencia de una operación de su muñeca derecha, porque sería una secuela del daño sufrido en cautiverio, rechaza categóricamente ese cobro, por no ser efectivo, no constando a su parte el gasto en el que el actor habría incurrido; cuánto habría aportado el sistema de salud; dónde habría sido operado y que la dolencia sería efectivamente una secuela de la prisión y que no corresponde a otra dolencia producto de una enfermedad natural o congénita, etc. Añade que rechaza este ítem, por no tener ninguna conexión de causalidad con los hechos expuestos y además por no constar el origen o causa de la lesión, ni las condiciones económicas y de régimen de salud en que la intervención médica se habría producido.

En cuanto a lo demandado por concepto de Lucro Cesante, que asciende a la suma de \$609.700.000, y que se justifica por el actor señalando que corresponde a la “suma de 134 meses en que habría estado sin percibir remuneración”, la que calcula en base a un promedio de US\$6.500.- dólares mensuales (dólares americanos), expresa que rechaza categóricamente este cobro, por no ser efectivo y ser en la especie un daño eventual, sin ningún fundamento serio o simplemente hipotético.

Alega en primer lugar, que después del 11 de Septiembre de 1973 y en los años posteriores Chile atravesó por varias recesiones y crisis económicas, de tal forma que sostener que el demandante habría percibido en Chile y durante ese período remuneraciones promedio de US\$ 6.500 dólares mensuales no pasa de ser una mera elucubración o daño hipotético o eventual y sin ningún fundamento.

Por otra parte, tampoco podría considerarse el supuesto lucro cesante basado en el no conocer el idioma del país donde residiría, y por ello no poder trabajar en su especialidad, esta argumentación no tiene asidero jurídico porque cae de lleno en lo hipotético o eventual.

Cita al efecto a don Arturo Alessandri Rodríguez, quien en su obra “De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno” edición del año



«RIT»

Foja: 1

1943, en el párrafo 457 refiriéndose al “Daño Emergente y Lucro Cesante”, en la pág. 551 expresa: *“La reparación del lucro cesante ofrece, en cambio, mayor dificultad, porque éste no es siempre de fácil determinación. Al respecto, sólo deben considerarse las utilidades realmente probables y no las posibles (1). Si se trata de un accidente corporal, por ejemplo, el lucro cesante se determinará a base de lo que ganaba o podía ganar la víctima, atendidas su edad, condiciones físicas y morales, competencia, etc.; pero no de los que pudiese ganar por una situación extraordinaria o inesperada (2). La Corte Suprema ha podido decir, por eso, que no es elemento para determinar este lucro lo que el acreedor hubiera podido obtener empleando sus actividades en otros negocios posibles (3). La Corte de Apelaciones de Santiago ha dicho, a su vez, que el hecho de que la víctima poseyera un título profesional que la habilitaba para el ejercicio de actividades comerciales y financieras, no constituye por sí solo una base positiva para regular el lucro cesante, para ello sería menester que apareciese además, establecido que la víctima ejercía efectivamente una industria o comercio propiamente tal, que a su muerte se hubiese paralizado con la pérdida consiguiente de las respectivas utilidades, y ello no constaba en autos....pág. 552 En todo caso, el daño emergente y el lucro cesante deben apreciarse in concreto, según la situación particular de la víctima. Como dice Savatier, “un mismo hecho puede ser más o menos perjudicial, según la persona que lo sufre y la forma como administra su patrimonio”. En el párrafo 141 pág. 217, refiriéndose al “Daño Eventual”, señala: Un daño eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas, por fundadas que aparezcan, sea presente o futuro (5), no da derecho a indemnización”.*

En subsidio de las alegaciones precedentes, refiere que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos se debe considerar, en lo que corresponda, los pagos recibidos a través de los años por los actores de parte del Estado conforme a las leyes de reparación (N° N°19.992 y sus modificaciones y demás normativa pertinente) y que seguirá recibiendo a título de pensión, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales concedieron, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral.

Advierte que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.



«RIT»

Foja: 1

Agrega que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia.

Hace presente también, que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en autos acoja la demanda y establezca esa obligación y además, desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Pues bien, a la fecha de interposición de la demanda o de su notificación y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación de indemnizar ha sido establecida, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, resulta improcedente pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1.551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Señala que la jurisprudencia así lo ha decidido de manera uniforme. Ha dicho expresamente a este respecto que, *“En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar v el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda al cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio”*.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se acojan las referidas acciones y se condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrían devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.



«RIT»

Foja: 1

En mérito de ello, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma en que han sido solicitados en las demanda.

**TERCERO.** Que, evacuando la réplica, el demandante reitera todos los fundamentos de hecho y de derecho que expuso en su demanda, dándolos por reproducidos en su réplica y agrega:

Respecto a la excepción de “reparación satisfactiva o integral”, denominada también “excepción de pago”, alegada por la defensa fiscal y consistente en aplicar el modo de extinguir las obligaciones “excepción de pago” o de “reparación satisfactiva o integral”, en consideración a que el demandante ya ha sido indemnizado en virtud de la ley 19.123, que creó la “Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación”, y fundamentalmente, por los beneficios pecuniarios percibidos al amparo de las leyes N° 19.234 y N° 19.992 y sus modificaciones posteriores, le parece absolutamente errado. Señala que en el mejor de los casos, los montos que otorgan las referidas leyes sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Dichas pensiones en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por nuestra mandante en su calidad de víctima de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

Con todo, añade, nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Conforme con ello es evidente que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada. Indica que parece bastante razonable que el Fisco reconozca por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a la víctima directa que aquí represento. Por lo demás “los pagos” que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que además alega.

Advierte que, en su escrito de contestación, el Fisco de Chile vuelca su empeño argumentativo señalando que, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hace referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por los redactores del proyecto. La noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas se encuentra en diversos. También está presente en la discusión, la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y de reparación. En definitiva, explica que las diferentes leyes de reparación han establecido



«RIT»

Foja: 1

diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación (sic).

Expone que teniendo en consideración los argumentos vertidos en el párrafo anterior, la ley N° 19.123 en su artículo 2 establece que “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”. La palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de su mandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padecen hasta el día de hoy por las brutales torturas padecidas. Lo anterior, porque el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparada totalmente subsiste intacto e irreductible hasta el día de hoy.

Añade que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24 (“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiese corresponder al respectivo beneficiario”), entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión como ocurre en este caso concreto. En otras palabras, al no establecer la ley en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo insostenible resulta la excepción de reparación integral, o de pago, invocada por el Fisco.

Afirma que así también lo han entendido los tribunales superiores de Justicia en forma reiterada. No cabe entonces que el demandado con una interpretación bastante particular y cuestionable desde el punto de vista jurídico, trate de decir que en base a las leyes precitadas, las víctimas de violaciones a los derechos humanos estarían impedidas de demandar.

Ejemplifica lo anterior con lo sentenciado en la causa “Valencia Oyarzo Eliecer con Fisco de Chile, en que se condenó al Fisco a pagar la suma de \$150.000.000 a víctimas sobrevivientes del centro de detención y tortura ubicada en la Isla Dawson (Rol Corte Suprema 1092-2015). Además de los casos en que ha sido demandado el Fisco por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, y que este ha utilizado como defensa, la misma excepción de reparación integral aquí analizada, como por ejemplo en el de Carmelo Soria, cuyos familiares si obtuvieron una indemnización independiente de ser beneficiarios del Informe Rettig. Lo mismo ocurre con el caso del abogado Sr. Julio Cabezas, el caso de la familia de Tucapel Jiménez, a quienes el Consejo de



«RIT»

Foja: 1

Defensa del Estado indemnizó con una cuantiosa suma pese a recibir los familiares la misma pensión Rettig. Casos también como el de la familia del ex Canciller Orlando Letelier o el de la señora Otilia Vargas (madre de 5 desaparecidos), incluso el acuerdo arribado con la familia del General Carlos Prats, vienen a confirmar que es perfectamente compatible una indemnización en conjunto con la reparación del Informe Rettig. Si así no lo entendiéramos, el Consejo de Defensa del Estado estaría haciendo discriminaciones que no se condicen con lo expresado en nuestra Constitución o al menos se estaría contradiciendo en sus aseveraciones. Cita también a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el Caso Montes con Fisco de Chile, 10-07-2007, Considerando 7º; caso Carrasco con Fisco de Chile, 10-07-2007, Rol 6715-2002, Considerando 8º; Caso “Jara con Fisco de Chile”, 23-09-2009, Rol 2839-2008, considerando 10º y Caso “Vergara con Fisco de Chile”, 23-09-2009, Rol 2495-2008.

Añade que también la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, a desestimando las alegaciones del Estado de Chile, citando al efecto “Caso San Javier” Rol 4723-2007, considerando décimo cuarto.

Afirma que, nos encontramos con una norma rectora establecida en el artículo 76 de La Constitución Política de La República, bien conocida por todos; “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. En virtud de este artículo, el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la ley 19.123 y especialmente en la Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, para decir que el daño moral ya está reparado llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional.

Finalmente, afirma que si se aceptara la tesis Fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir el Estado de Chile, y le estaría vedado a las víctimas discutirlo. Claro está, que un razonamiento así es contrario a cualquier principio básico del Derecho.



«RIT»

Foja: 1

En segundo lugar y respecto a la excepción de prescripción extintiva, advierte que es jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil.

Tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema.

Explica que en el caso "Caro con Fisco de Chile", la Corte Suprema da buena cuenta de ello: "Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se encuentra consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, no indica cual es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4° del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado" (Cfr. Excelentísima Corte Suprema, 19.10.05, "Caro Silva con Fisco de Chile", Rol N° 4004-2003, considerando N° 6).

En el mismo sentido, en el caso "Bustos con Fisco" el Máximo Tribunal ha dicho que: si bien el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, reconoce el principio de la responsabilidad del Estado, no indica cual es la naturaleza de ésta, de suerte que para determinarla debe necesariamente remitirse a la ley y, en este sentido, el artículo 4° de la Ley N° 18.575 previene en general, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado" (Cfr. Excelentísima Corte Suprema, 26.01.05, "Bustos Riquelme con Fisco de Chile", Rol N° 3354-2003, considerando N° 7.)

Hace presente que la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la "inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado"



«RIT»

Foja: 1

basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”. Alegación, esta última, que resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Igualmente, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

En este orden de ideas, explica que la doctrina de los actos propios consiste simplemente en castigar como “inadmisibles toda pretensión contradictoria con comportamientos observados anteriormente por el mismo sujeto que hace valer dicha pretensión” (Cfr. Pardo De Carvallo, Inés. La doctrina de los Actos Propios. Revista de Derechos de la U. Católica de Valparaíso XIV, 1991-1992. P. 67). En tal sentido ha fallado uniformemente nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades. Así ha sentenciado: “Que al actuar de la forma que lo hicieron los ejecutados (...), es hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, importando un perjuicio en contra del acreedor, lo que no resulta aceptable, de acuerdo al principio acogido por este tribunal, por la doctrina, y que inspira además disposiciones como es la del artículo 1683 del Código Civil y otras de nuestra legislación, principio que recibe el nombre de teoría del acto propio. Se expresa en la forma latina *venire cum factum non valet*, lo que implica que no es lícito hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, y siempre que este cambio de conducta o comportamiento importe un perjuicio en contra de otro o sea contrario a la ley, las buenas costumbres o la buena fe” (Cfr. Corte Suprema. 20.04.2004. ROL N° 3097-2003. Considerando N° 4.)

Aun así, menciona que el demandado en su contestación de la demanda, insiste que el caso de autos estaría prescrito. Tal hecho no es así por varias razones:





-La acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción. (Artículo 38° inciso 2° de la Constitución Política de la República).

-El demandado no (re) conoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos, como se verá más adelante.

Afirma que de acuerdo a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” es un error ignorar el hecho, que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes. Al respecto, basta tener a la vista el Art. 63 de la citada Convención junto con la enorme cantidad de jurisprudencia que, desde hace varios años, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo. En nuestro medio, añade, ya existen precedentes jurisprudenciales que refuerzan esta misma idea. De hecho, la Corte de Apelaciones de Santiago ha sentenciado que “cabe precisar que la fuente de la responsabilidad civil, tratándose de una violación a los derechos humanos, está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos. En efecto, de acuerdo a los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando ha habido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. A juicio de la Corte Interamericana, el artículo 63.1 de la Convención constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales (...)” (Caso Aloeboetoe y otros de 1993). En un fallo reciente, aplicando este criterio señala: “Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de La Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación” (Caso Trujillo Oroza, de 2002. En el mismo sentido: caso Cantoral Benavides, de 2001; caso Cesti Hurtado, de 2001; caso Villagrán Morales y otros, de 2001; caso Bámaca



«RIT»

Foja: 1

Velásquez, de 2002). En otras sentencias, la misma Corte ha manifestado: "Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general de derecho, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente". (Caso Velásquez Rodríguez, de 1989. En el mismo sentido, caso Godínez Cruz, de 1989. Asimismo La Corte cita fallos de otros tribunales en que se ha sostenido la misma doctrina, dictados los años 1927, 1928 y 1949). La Corte también ha aclarado que el artículo 63.1 de La Convención no remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de manera que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencia del derecho nacional, sino con independencia del mismo. (Caso Velásquez Rodríguez). De otra parte, se ha señalado que esta responsabilidad estatal surge sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, lo cual resulta lógico ya que indudablemente una violación de derechos humanos, por su naturaleza, supone dolo o al menos culpa estatal. En este sentido refiere el juez Cancado Trindade: "En mi entender, la responsabilidad internacional del Estado se compromete a partir del momento en que deja él de cumplir una obligación internacional, independientemente de la verificación de falla o culpa de su parte, y de la ocurrencia de un daño adicional. Más que una presunta actitud o falla psicológica de los agentes del poder público, lo que realmente es determinante es la conducta objetiva del Estado (la debida diligencia para evitar violaciones de los derechos humanos). Se puede, así, ciertamente llegar a la configuración de la responsabilidad objetiva o absoluta del Estado a partir de la violación de sus obligaciones internacionales convencionales en materia de protección de los derechos humanos. Sobre dicha responsabilidad objetiva reposa el deber de prevención (Voto del Juez A. Cancado. Caso El Amparo)". (Cfr. Corte de Apelaciones de Santiago. Caso Marfull. 18.01.06. ROL N° 37.483-2004. Considerando N° 18.)

Reitera que sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas. Al respecto, la ltima. Corte de Apelaciones ha sentenciado recientemente en relación a la imprescriptibilidad de la acción civil en delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado que: "la imprescriptibilidad señalada rige tanto para el ámbito de lo penal como de lo civil, puesto que carece de sentido, frente a la antedicha afirmación basada en el ius cogens, sostener la imprescriptibilidad para el primer ámbito y



Foja: 1

desestimarla para el segundo, aduciendo para ello que éste es patrimonial, así como también el derecho a la indemnización reclamada, y por lo mismo privada y renunciable". Y luego, continúa señalando "Que la prescripción de la acción de que se trata no puede ser determinada a partir de las normas del derecho privado, que se refieren efectivamente a cuestiones patrimoniales, pues esas normas atienden a finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los derechos humanos y del ius cogens, que importan obligaciones de respeto, de garantía y de promoción de esos derechos, así como la adopción de medidas para hacerlos efectivos". (Cfr. Corte de Apelaciones de Santiago, 11.05.07, Caso "Reyes Gallardo con Fisco de Chile", Rol N° 3505-2002. Considerandos N° 2 y N° 3).

Con todo, "Tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX" (Cfr. Corte De Apelaciones de Santiago, Caso "Carrasco con Fisco de Chile", 10.07.2007 , Rol 6715-2002).

Señala que, sin lugar a dudas, la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. En tal sentido, el profesor Carlos Ducci enseña que la interpretación estricta y/o restrictiva, que se funda en motivos lógicos o en el respeto a los derechos individuales, se aplica en primer término a las leyes penales, debiendo hacerse presente que la jurisprudencia ha dado el carácter de pena a las sanciones en general, más allá del campo estrictamente penal (Ducci, Carlos. Derecho Civil. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. 4a Ed. 2005. p. 94). La evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos humanos. En efecto, pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común supletorio a



«RIT»

Foja: 1

todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula: El Derecho Privado regula las relaciones desde un plano de igualdad con plena autonomía de las personas para obligarse y cuyo fin es el bien particular en tanto su objeto es el intercambio de bienes. El Código Civil es supletorio al Derecho Privado, al que orienta. El Derecho Público, en cambio, regula la relación de los particulares frente al Estado cuyo fin es el bien común basado en los principios de juridicidad y supremacía constitucional. Más aún, luego del advenimiento de la 2a guerra mundial y la experiencia aciaga que significó el régimen nazi, surge fuertemente la necesidad de limitar el poder y arbitrariedad del Estado, modificando radicalmente la concepción de la soberanía estatal, limitando su ejercicio al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana dando vida al complejo normativo de los Derechos Humanos. De este modo, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código Civil reconoce en su artículo 4° al estipular que las disposiciones particulares “se aplicaran con preferencia a las de este Código”.

En consecuencia, agrega que la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

Cita a mayor abundamiento otra sentencia de La Excelentísima Corte Suprema que acoge la imprescriptibilidad de la acción civil de fecha 08-04-2010 caso “Ortega con Fisco” Rol 2080-2008.

En tercer lugar, respecto al derecho aplicable, señala que cualquier estatuto que se aplique llevará a la misma conclusión: la existencia de la



«RIT»

Foja: 1

responsabilidad del estado, por hechos que causan daño y en que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar tales daños. En un Estado de Derecho real - y no aparente - el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”. Añade, que el derecho citado por las partes no es vinculante para el jurisdiscente. Este será el que soberanamente aplique el derecho al caso concreto. Ese derecho que se construye desde las normas constitucionales que conforman las bases de la institucionalidad hasta las legales. No olvidando las internacionales vinculantes para el Estado de Chile a propósito del inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política.

En cuarto lugar, respecto a la Jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, señala que respecto a la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia de la Excelentísima Corte ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización.

Por último, en relación al monto de lo demandado y los reajustes, reitera que no hay dinero que supla el dolor experimentado el demandante, y es justamente el por qué en su petitorio se solicita que se condene en la suma que el Tribunal disponga.

**CUARTO.** Que, evacuando la dúplica, el demandado ratifica la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda, dándolas por expresamente reproducidas y conforme a ellas, solicita el rechazo de la demanda y agrega a continuación:

En relación a la excepción de reparación satisfactiva, reitera lo ya señalado en la contestación, en cuanto a que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada. Insiste respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por el demandante, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

Añade, en relación a la excepción de prescripción opuesta, la importancia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 21 de enero de 2013,



«RIT»

Foja: 1

sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” y que se citó en el escrito de contestación a la demanda.

Sostiene que en dicho fallo, se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Asegura que desde hace más de 10 años la Excma. Corte ha señalado reiteradamente que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. La aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican *“a favor y en contra del Estado”*.

Insiste también, que la Excelentísima Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contiene normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia. Al respecto, cita Sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016, pronunciándose respecto a la excepción de pago y de prescripción.

**QUINTO.** Que para acreditar sus dichos, la demandante acompañó en autos las siguientes probanzas:

Prueba Documental.

A folio 1, acompaña: a) Certificado de calificación de víctima reconocida por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con la copia del Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Informe Valech) donde consta el nombre y número del demandante, debidamente timbrado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; b) Certificado de nacimiento de don Gustavo Muñoz López; c) Mandato Judicial de don Gustavo Muñoz López, conferido a don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, otorgado el 3 de Agosto de 2018, ante la abogada María Soledad Santos Muñoz, Notario Público de Santiago, bajo el repertorio N°



«RIT»

Foja: 1

10.031- 2018; d) Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 1092-15, dictada el día 14 de septiembre de 2015.

A folio 16, acompaña: Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2-2017, en virtud de la cual el Estado de Chile ha sido condenado al pago de indemnizaciones a víctimas de la dictadura cívico-militar cuyas acciones civiles impetradas fueron rechazadas por la justicia chilena por considerar que estaban prescritas

A folio 56, acompaña: a) Copia de la Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018; b) Copia de la Sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018; c) Copia de la carpeta de antecedentes que se tuvieron a la vista para acreditar la calidad de víctima de don Gustavo Muñoz López, debidamente autorizados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; d) Copia de carpeta con tres de los contratos laborales de don Gustavo Muñoz López, que acreditarían la sobre calificación que tenía al momento de ser víctima del terrorismo de Estado; e) Copia de la carpeta de antecedentes médicos que acreditan el daño físico de don Gustavo Muñoz López; f) Copia de la Resolución de la Comisión de Evaluación de Incapacidad por Accidentes del Trabajo de don Gustavo Muñoz López, de fecha 29 de julio de 1999; g) Copia Informe Médico suscrito por la Dra. María Helena Perry; h) Copia de Informe Radiológico suscrito por el Dr. Miguel de Peña Bello.

#### Prueba Testimonial.

A folio 58, consta la diligencia de prueba testimonial de la parte demandante, testigos que legalmente juramentados y sin tachas, declararon al tenor de los puntos de prueba fijados por resolución de fecha 3 de marzo de 2020, lo siguiente: Comparece don Julio del Río Navarrete, quien al punto de prueba número uno (1.- Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios reclamados por la demandante) señala que fue un proceso bastante largo a partir del 11 de septiembre de 1973, que a raíz del Golpe Militar del 11 de septiembre, no pudieron dirigirse a sus hogares a raíz del Golpe Militar porque las calles estaban bloqueadas. Señala que estaban trabajando en la CORFO Central, que queda en Ramón Nieto. Estando en ese edificio, ocurre el asalto por parte de los soldados del Ejército, alrededor del mediodía, la irrupción la hacen a través de una bomba que ponen en la puerta principal, y penetran al edificio. Prosigue, que al ingresar al edificio, irrumpen violentamente, destruyendo todo a su paso, disparando como en



«RIT»

Foja: 1

un enfrentamiento, rompiendo vidrios y puertas interiores de la oficina. En el edificio no hubo ninguna oposición ni resistencia. Después que ellos repasaron todas las oficinas, comenzó el saqueo por parte de los soldados, saqueo de artículos que estaban dentro de los escritorios, libros, lápices, teléfonos, calculadoras, todo lo que un saqueo significa. Posterior a eso, señala que los hicieron salir a los pasillos, acostarse boca abajo en el piso que estaba lleno de vidrios. Si uno conoce las oficinas de CORFO, todas ellas tienen puertas o espacios de vidrio, y saltaron al pasillo evidentemente, eso significó que todos los pisos estaban llenos de vidrios. A continuación, procedieron a pisarlos y caminar encima, lo que significó que les pisaran, caras, espaldas, todo el cuerpo, Obviamente, les quedó sangrando toda la cara y las manos. Después de esto, salieron a calle Ramón Nieto, donde había unas patrullas de carabineros, que estaban junto a las patrullas de soldados; carabineros procedió a revisarles los bolsillos, procedieron y robar todo lo que tenían, especialmente, dinero, relojes, anillos, todo objeto de valor. Después de esto, los funcionarios del Ejército los llevaron por calle Moneda, eran aproximadamente 40 personas, entre las que había profesionales de distintas categorías, Ingenieros comerciales, Ingenieros Civiles, Contadores Auditores, abogados, y entre estos profesionales estaba Gustavo Muñoz. A las mujeres que había en Corfo, no las sacaron a la calle, sino que las dejaron al interior, entre estas mujeres estaba la Hija del General Pickering, aparentemente por condescendencia a ella, no llevaron a las mujeres al Ministerio de Defensa, pasando por la Moneda. El camino fue por Moneda y Morandé, en fila india por el medio de la calle. Señala que en esos instantes había intercambio de disparos y prácticamente los llevan como escudos, después siguieron caminando por el medio de la calle, los disparos venían de los edificios alrededor de la Moneda, sin saber si era fuego amigo o enemigo. Siguieron caminando por Morandé, hasta cruzar la Alameda, y llegaron a la puerta de entrada del Ministerio de Defensa, por la continuación de Morandé llegando a la Alameda; en el ingreso del edificio del Ministerio de Defensa, había un grupo de soldados que eran, fundamentalmente, Cadetes de la Escuela Militar, pero con armamento de guerra. Estos soldados procedieron a hacer dos filas, lo que se denomina callejón oscuro; al pasar por el medio de estas dos filas, los golpearon con culatazos en la parte superior de nuestro cuerpo. Relata que fue increpado por un cadete de la Escuela Militar, porque le parecía extraño ver a una persona de tez blanca y cabello rubio dentro de los partidarios de la Unidad Popular. Pasado este callejón oscuro, llegaron al hall central del Ministerio de Defensa, en donde los hicieron arrodilla. Allí, llegaron oficiales de inteligencia para los primeros interrogatorios, con preguntas del tipo: primero, dónde están las armas, segunda





«RIT»

Foja: 1

pregunta, donde está Pedro Vuskovich, en ese momento Vicepresidente de la Corfo, tercera pregunta, cuánto ganas, esta era la respuesta que más les incomodaba, porque de acuerdo al Escalafón de Corfo, tenían un sueldo alto, y a un Oficial de ejército, les dolía mucho, evidentemente no podían comparar a un profesional, Ingeniero, o abogado, con un oficial de ejército. Agrega que nunca les preguntaron nada referente a su trabajo propiamente tal. Indica que en su caso particular y el de Gustavo, estaban a cargo del abastecimiento de las Fuerzas Armadas, por lo cual, sabían la cantidad de personas que tenía cada una de las Fuerzas Armadas, carabineros, ejército, fuerza aérea, armada, que son conocimientos estratégicos evidentemente. Todo esto fue encargado en persona por el Presidente Allende, para que las Fuerzas Armadas no tuvieran problemas en su abastecimiento, lo cual se llevaba por medio de un proyecto computacional llamado Proyecto Sinco. Después de este interrogatorio, como a las 2 o 3 de la mañana, los llevaron al subterráneo del Ministerio, donde los pusieron amarrados, con las manos en la espalda, sentados en el suelo, hasta el otro día. Hace presente, que todo el interrogatorio, fue hechos bajo la presión de puntapiés y golpes de puño. Los puntapiés eran en el suelo cuando uno caía de los golpes de puño, y donde cayeran, en las costillas, entrepiernas, todos terminamos con costillas fisuradas, rotas, y con problemas en el estómago, en el intestino, golpes que llevan a una serie de anomalías intestinales. Una vez terminado todo este interrogatorio, los llevaron de nuevo a las salas del Ministerio, para ser trasladados en buses al Estadio Chile. Una vez llegando al Estadio Chile, en una calle antes a la entrada principal del Estadio Chile, los hicieron descender del Bus, y pusieron en fila india hasta la puerta de entrada, donde los recibió el Comandante Manríquez, Jefe del Recinto de Detención. Como era el primero en la fila, por estatura, fue al primero que interrogó personalmente, poniéndole una pistola con la bala pasada en la sien, preguntándole de dónde venían y quiénes éramos, qué partido político tenían, a lo que le contestó que éramos todos profesionales de CORFO; que la mayoría eran independientes de izquierda, a lo que les señaló que habían unos interrogadores que les sacarían la verdad de todas maneras; en ese minuto iban sacando un cadáver de un niño de no más de 15 o 16 años en una camilla, y les dijo: así como él van a salir ustedes si no dicen la verdad, y de ahí los hizo pasar al subterráneo del Estadio Chile, donde fueron recibidos por 12 oficiales jóvenes de ejército boina roja, que venían del Regimiento de Tanques, que había asistido al *Tanquetazo* del Coronel Souper, que habían sido detenidos y liberados el día 11 de septiembre, el día del Golpe. Afirma que esa gente eran realmente unos psicópatas por la forma de torturar y golpear, los golpeaba profesionalmente, especialmente a Gustavo y a él, sabían golpear, eran sesiones



«RIT»

Foja: 1

interminables, con golpes que dejaron muchas secuelas posteriores. Después de un par de días de interrogatorio, Manríquez determinó que ya eran suficientes, y los llevaron a las graderías superiores, les dieron un café y un pan duro, después de 7 días sin alimento. En las graderías superiores, donde los llevó el Coronel Souper, se encontraron con Víctor Jara, que estaba votado en muy malas condiciones, tenía la cara hinchada, las manos quebradas, las manos rotas, trataron de ayudarlo, pero era muy difícil porque estaba demasiado mal, ahí, el Coronel Souper se sentó al lado y les pidió disculpas por lo que había pasado. Después de esto, los bajaron llevaron en unos buses al Estadio Nacional, donde estuvieron hasta el día 2 de octubre. Señala que allí las torturas fueron fundamentalmente psicológicas, y los liberaron el 2 de octubre de 1973. Indica que ese tour de torturas trajo las siguientes secuelas: secuelas psicológicas, entre las cuales señala falta de sueño, miedo a los lugares oscuros, irritación sin causa lógica, todo esto fue revisado por psicólogos, en el caso personal con un informe contundente, hasta el día de hoy, por ejemplo la familia tiene miedo de que salgamos solos en la noche; en el caso de Gustavo, la que tuvo secuelas graves fue su hija Paula, que tiene terror que su padre Gustavo salga solo en horas de la noche. Las secuelas físicas, son innumerables. Señala que Gustavo tiene secuelas en la columna y en las costillas; también hay secuelas laborales, con los cuales existían listas negras que las empresas no podían contratar, empresas públicas y privadas, con lo cual el daño patrimonial fue brutal teniendo que deshacerse del patrimonio para poder subsistir; exiliarse. Eso en cuanto a los daños físicos y patrimoniales, en cuanto al daño físico existen testimonios y certificaciones de los daños que existieron. Eso en cuanto al daño que puede ser, el daño moral, es más difícil de cuantificar, pero existe, lo mismo que el lucro cesante, el no poder trabajar y obtener el dinero para el sustento diario. El daño emergente lo señala como todo lo que tuvieron que gastar para sobrevivir a los daños producidos, para corregir el daño obtenido por las distintas torturas, es decir, el daño emergente.

Comparece doña María Angélica Vega Maldonado, quien al punto de prueba número uno (1°.- Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios reclamados por la demandante) señala que su profesión es economista, y cuando era muy joven conoció a Gustavo Muñoz en CORFO, él allí trabajaba en el área de Propiedad Social, ésta era un área creada en el gobierno de Allende, para administrar como Corfo, las empresas que eran de su propiedad; era bastante mayor y agrega que era un destacado profesional, y ejercía de manera muy eficiente sus funciones, además, era alegre, tenía una familia muy bien



«RIT»

Foja: 1

constituida, con tres hijos, y con un pasar económico normal para profesionales universitarios de esa época, era solidario, alegre, le gustaba enseñar a los demás; agrega que no se refiere a que no sea así ahora, si no porque cree que el Golpe destruyó a Gustavo. Tanto la represión, su detención, como su estadía en los Estadios, le generaron un daño enorme, no sólo físico, sino que también en lo humano, nunca volvió a ser la misma persona. En lo físico afirma que después de visitarlo un par de veces siempre tenía dolor de columna, y siempre tenía alguna afección relacionada con su detención, y eso lo tuvo hasta hace poco; eso continúa hasta ahora, su dolor permanente. Señala que él nunca volvió a tener esa estabilidad económica, esa estabilidad emocional, esa forma de vida donde los niños también sufren secuelas, se tuvo que ir del país, y nunca tuvo la estabilidad necesaria, tanto económica como emocional. Añade que Gustavo, claramente quedó afectado, siempre fue proveedor de su familia, es muy machista Gustavo, y siempre ha querido proteger a su familia, y nunca volvió a trabajar como antes, cuando regresó a Chile, y también, cuando salió de la prisión, trabajó en una empresa grande porque él como profesional era muy destacado, y en esa empresa que él trabajó, lo hizo muy bien, pero él personalmente tenía miedos e inseguridad terribles, miedo a que lo fueran a buscar, miedo a la tortura de nuevo, y siempre tiene miedo a pasar hambre. Señala que Gustavo, no era así antes, no era como está hoy, y su mujer y sus hijos tuvieron que acompañarlo en todo su andar, y tampoco entonces, ha logrado la estabilidad emocional y económica que todo ser humano necesita.

Repreguntada para que aclare hace cuánto tiempo conoce al demandante don Gustavo Muñoz, responde que desde el año 1972.

**SEXTO.** Que, la parte demandada aportó en autos, las siguientes probanzas para acreditar sus alegaciones.

A folio 6, acompaña: Documento denominado constancia emitida por el Instituto de Previsión Social que informa sobre las pensiones y montos globales otorgados por el Estado al demandante a través de las leyes de reparación del daño moral.

A folio 11, agrega: Oficio Ord. N° 59583/2019, de 24 de junio de 2019, que contiene el informe emitido por el Instituto de Previsión Social, suscrito por el Jefe (S) del Departamento Secretaría General y Transparencia de dicha institución, sobre pagos de carácter económico efectuados por el Estado de Chile en relación al demandante, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura y exonerado



«RIT»

Foja: 1

político, por concepto de leyes de reparación, cuales son: Pensión mensual de la Ley 19.992; Aporte único de la Ley N° 20.784 y aguinaldos.

**SÉPTIMO.** Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por la detención ilegal, tormentos y torturas sufridas por don Gustavo Muñoz López, entre el 12 de septiembre de 1973 y mediados de diciembre del mismo año, por lo que resulta necesario determinar la existencia de dicha responsabilidad.

**OCTAVO.** Que, en atención a lo señalado por el documentos agregado a folio 1 y a folio 56 por la parte demandante, legalmente acompañados y no objetados por la contraria, en particular el Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 20 de diciembre de 2018, donde se certifica que don Luis Gilberto González Verdejo se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I; Copia del Testimonio del demandante en Ficha de Ingreso de Preso Político y/o Torturado, autenticados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, carpeta N° 2742 en que se identifica al demandante; y además, atendido que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias, sino que ha centrado la controversia en primer lugar, si el demandante ha sido ya reparado en los perjuicios alegados o si la indemnización pretendida resulta incompatible con las reparaciones concedidas por las leyes 19.123 y 19.992, con sus modificaciones y otras normas pertinentes; y en segundo lugar, si la acción indemnizatoria deducida por el actor se encuentra prescrita extintivamente a la fecha de haber sido notificada al demandado.

**NOVENO.** Que, de los párrafos reseñados en el considerando anterior, podemos concluir como hechos no controvertidos en autos: a) la calidad de víctima de detención ilegal, exilio y tortura de don Gustavo Muñoz López; y, b) que en la calidad antes señalada, aparecen en el Informe emitido por la Comisión Valech I, conforme al Decreto Supremo N° 1040/2003.

En consecuencia, se tendrá presente que la responsabilidad del Estado no ha sido discutida por las partes de este juicio, es más, la demandada alega expresamente, que el actor ha sido reparado satisfactoriamente por el Estado por los delitos cometidos en su contra durante la época de la dictadura.

Atendido a lo que se ha expresado en los párrafos anteriores, se tendrá por acreditado que la detención ilegal y tortura de don Gustavo Muñoz López,



«RIT»

Foja: 1

ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de marras.

Así lo expuesto, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley N° 19.123 y 19.992 al demandante.

#### **EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.**

**DÉCIMO.** Que, en primer lugar y respecto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada en cuanto a que la acción civil se encontraría prescrita, ya sea porque los hechos ocurrieron entre el 12 de septiembre y el mes de diciembre de 1973, o por la fecha de retorno a la democracia, por lo que han transcurrido con creces los plazos para ejercer la acción civil, se deben tener presente una serie de elementos facticos y jurídicos.

En primer lugar, y como ya se ha señalado reiteradamente en esta sentencia, nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los respectivos convenios e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de



«RIT»

Foja: 1

entonces o con simples fines de amedrentamiento de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

Considerando la conclusión del párrafo precedente, corresponde determinar si estos son prescriptibles o no, teniendo presente que partiremos enfocándonos en la acción penal. Así, uno de los elementos más característicos de los crímenes de lesa humanidad es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que *“Los crímenes siguientes son imprescriptibles, (...) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz...”* y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994<sup>1</sup>. Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro país, las normas y especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin lugar a dudas se elevan a la categoría de *ius cogens*, la que sí tiene plena aplicación en nuestro derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado *“Episodio Tejas Verdes”* de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol N° 4300-2014, denominado *“Episodio Nilda Peña Solari”* de fecha cuatro de septiembre de 2014, en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado *“Episodio Villa Grimaldi”*, caratulados *“Ramón Martínez González”*, de fecha diez de noviembre de 2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos.

En consecuencia, habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, es necesario establecer si en el caso de marras la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil.

Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la presente acción indemnizatoria, si esté

<sup>1</sup> Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, Artículo 3: *“Crímenes contra la humanidad. El Tribunal Internacional para Ruanda está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un ataque generalizado y sistemático, y dirigidos contra cualquier población civil en razón de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político, étnico, racial o religioso: a) Asesinato; b) Exterminación; c) Reducción a la servidumbre; d) Expulsión; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violaciones; h) Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos.”*



«RIT»

Foja: 1

sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, en reiterados fallos, como por ejemplo en la sentencia de reemplazo en causa Rol. N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, denominado “*Episodio Nilda Peña Solar*” (considerando Segundo), de igual forma en causa Rol. N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, denominado como “*Episodio Tejas Verdes*” (considerando Undécimo, segundo párrafo), en la cual se establece claramente que la acción civil es imprescriptible. A mayor abundamiento señala el citado fallo:

*“... Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama...”*

Misma conclusión ha llegado la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo en sentencia causa Rol. N° 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014 (considerando Décimo Cuarto), la que señala en lo relativo a la acción civil que al igual que la acción penal, ésta

*“... es imprescriptible porque se sustenta en una conducta ilícita de agentes del Estado... calificándose el delito de lesa humanidad”.*

Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno



«RIT»

Foja: 1

para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

Señala también la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, que dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales.

Es así, que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien también se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, este sentenciador y teniendo presente las normas ya referidas y por los fundamentos antes expuestos, rechazará tanto la alegación principal como la subsidiaria en cuanto a declarar cualquiera de las prescripciones de la acción civil que da origen a estos autos, declarando expresamente para los efectos de la presente sentencia, que la acción civil emanada de un acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad, también es imprescriptible.

**EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE REPARACIÓN SATISFACTIVA O DE PAGO.**





«RIT»

Foja: 1

**UNDÉCIMO.** Que, la parte demandada opuso también la excepción de ser improcedente la indemnización por la existencia de reparación satisfactiva obtenida por el demandante.

Al respecto, cabe tener presente que la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios, a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

Asimismo, la citada ley en parte alguna estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y N° 19.992 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, sin perjuicio, es pertinente señalar además, que la demandante, de conformidad a lo informado en el Oficio Ordinario DSGT N° 59583/2019 del 24 de junio de 2019, agregado a folio 11, el demandante no ha recibido beneficios de conformidad a la Ley N° 19.123.

Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos, indicando incluso que las fuentes que dan origen a la indemnización por



«RIT»

Foja: 1

daño moral y los beneficios establecidos por la Ley N° 19.123 provienen de fuentes distintas. Es así, que la indemnización encuentra su fuente en el derecho internacional por la demanda que se hace al Estado en la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos así como la interpretación de las disposiciones de derecho internacional que conforman el *ius cogens* que tiene plena aplicación en virtud del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, a diferencia de la norma legal interna citada. Indica que el espíritu de la Ley N° 19.123 al establecer beneficios relacionados con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no pueden confundirse con aquellas que emanan del Derecho Internacional que imponen la obligación de reparación íntegra. Refiere que la citada ley no establece la incompatibilidad reclamada por el Fisco, como tampoco importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia. Por último, agrega que los beneficios establecidos en el cuerpo legal no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas (*Sentencia Corte Suprema, Rol N° 1424-2013, “Episodio Tejas Verdes”, considerando décimo tercero*).

**DUODÉCIMO.** Que, a fin de zanjar la discusión anterior, el hecho que el demandante sea beneficiario de un sistema de previsión de salud especial, de gestos simbólicos u otras medidas análogas, no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales han sido víctimas directa o indirectamente.

Cabe hacer presente además, y como es de público conocimiento, que muchos de los “gestos simbólicos” como señala la demandada en su escrito de contestación han sido realizados, organizados y financiados por particulares y organizaciones no gubernamentales, en los cuales el Estado ha participado de manera tangencial o derechamente no lo ha hecho.

Es por lo anteriormente expuesto que se rechazara la excepción alegada de reparación satisfactiva, respecto de los beneficios ya obtenidos por el demandante.

#### **EN CUANTO AL FONDO.**

**DÉCIMO TERCERO.** Que, entrando al fondo de la acción deducida, y teniendo establecida la responsabilidad civil el Estado, según se explicó en los considerandos octavo y noveno de esta sentencia, habiéndose además declarado la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N° 19.123 y N° 19.992 y las reparaciones



«RIT»

Foja: 1

simbólicas, según considerando décimo, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el considerando undécimo, corresponde analizar la procedencia de indemnizar al demandante por el daño moral con ocasión de su detención y torturas, cometida por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las excepciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el actor, opuesta por la demandada. Asimismo, cabe analizar la procedencia de las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante que se reclaman, al tenor de lo expuesto en el libelo.

En primer lugar, y en cuanto al daño moral, debe tenerse presente que este es definido como el detrimento, angustia, dolor sufrimiento, aflicción o menoscabo o trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado.

Así también, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

**DÉCIMO CUARTO.** Que, lo descrito por el demandante en su libelo, en concordancia con que dichas circunstancias no fueron objetadas ni desacreditadas por la demandada, y el hecho que el actor se encuentra incorporado como víctima de prisión y torturas por la Comisión Valech I, habiéndose efectuado por este organismo un proceso investigativo y formado convicción de la calidad de víctimas de las personas incorporadas en dicho listado, ya bastan para tener por acreditado el daño moral sufrido por el demandante, presumiéndose con claridad la circunstancia de su detención, el tiempo que duró esta, la aplicación de reiteradas y terribles torturas, le causó un gravísimo pesar y dolor, los que razonablemente se profundizaron y profundizan con el pasar del tiempo al unir las graves perturbaciones que sufrió a lo largo de su vida, como fue el hecho de no poder encontrar un trabajo estable, tener que exiliarse por largos años. Dichos padecimientos se ven reafirmados por la declaración de los dos testigos aportados por la parte demandante, que con fecha 07 de diciembre de 2021, están contestes



«RIT»

Foja: 1

en el hecho que la detención ilegal del demandante, lo dejó en una seria situación económica y psicológica, y nunca se recuperó totalmente de las secuelas provocadas por lo sufrido.

Se debe tener presente también, que respecto de la materia que nos convoca, este daño moral es el único que se encuentra establecido por ley; así, la Ley N° 19.123 reconoce clara e innegablemente la existencia de daño moral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a quienes se consideran causantes de los beneficios ahí establecidos, haciéndose extensivo a los familiares<sup>2</sup>. Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema al indicar que los citados cuerpos legales de manera explícita reconocen la existencia de los daños a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares.

En consecuencia, por todo lo expresado, se encuentra ampliamente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado al demandante, en circunstancias de su detención, prisión política y torturas, cometido por agentes del Estado en, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia.

**DÉCIMO QUINTO.** Que, la demandada ha alegado que la suma sobre la que se pretende obtener una indemnización, resultan excesivas, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en estas materias y los montos promedios fijadas por los tribunales de justicia. Además, subsidiariamente alegó que la regulación del daño moral, debe considerar todos los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Conforme al oficio Oficio Ordinario DSGT N° 59583/2019 del 24 de junio de 2019, agregado a folio 11, hace presente que don Gustavo Muñoz López, recibe una pensión de reparación como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados de la Comisión Valech y fue beneficiario del Aporte Único de Reparación de la Ley N° 20.874.

Que, en virtud de lo informado por el citado Oficio, en cuanto a que el actor es beneficiario de una pensión en virtud de la Ley 19.992, cabe señalar que

---

<sup>2</sup> Ley N° 19.123 Crea Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Establece Pensión de Reparación y otorga Otros Beneficios en favor de personas que señala (1992),

*“Artículo 2°.- Le corresponderá especialmente a la Corporación:1.- Promover la **reparación del daño moral** de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley.*

*Artículo 18.- Serán causantes de la pensión de reparación las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.”*



«RIT»

Foja: 1

ninguna de las disposiciones de la citada norma, establece la renuncia del derecho a reclamar una indemnización por daño moral.

Además, aun cuando pudiéramos estimar que la pensión vitalicia recibida viene a suplir parte del sufrimiento padecido por el demandante, el otorgamiento de dicha pensión se fundamenta en una norma de carácter general, estableciendo pensiones reparatorias para un universo de víctimas, no verificando la situación particular de cada individuo y por tanto, no podría estimarse que suple de forma razonable y suficiente la totalidad del daño.

En conclusión, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

Ahora, respecto al Aporte Único de Reparación recibido por la demandada en virtud a la Ley N° 20.874, establece en su artículo 1 inciso 3° que “Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”, por lo que habrá de considerarse el monto recibido por el demandante en este concepto, al momento de determinar las indemnizaciones pertinentes.

En consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.992 y 20.874 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, correspondiendo a pagos de distinta naturaleza que cumplen con un objetivo diverso y que además emanan de una fuente distinta.

Así, habiendo establecido que no existe una incompatibilidad entre los beneficios otorgados voluntariamente por el Estado y las acciones judiciales que puedan hacer valer en Tribunales, la alegación de la demandada de tener en consideración pagos efectuados a terceros, solo será considerada parcialmente, en atención a lo analizado en los párrafos anteriores.

Por último y en lo referente a tener en consideración los montos establecidos por otros tribunales, cabe recordar que rige para todos los tribunales del país el principio de independencia, que el hecho de citar jurisprudencia en un fallo tiene por objeto simplemente reforzar los fundamentos que se plantean en cada sentencia individualmente, no operando en nuestro país la doctrina del “*stare decisis*” (ya sea horizontal o vertical). Tanto es así, que lo más cercano a ello puede encontrarse únicamente el procedimiento laboral, en el que el legislador creó de forma extraordinaria el recurso de unificación de jurisprudencia, dando



«RIT»

Foja: 1

cuenta que ello constituye una excepción a la generalidad de nuestros procedimientos.

**DÉCIMO SEXTO.** Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el actor, es necesario fijar su cuantía en dinero. Cabe señalar que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido.

Para esta materia, este sentenciador considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño y las horribles circunstancias de ilícito, esto es detenciones ilegítimas y reiteradas torturas del demandante, sin poder desarrollarse normalmente en su entorno familiar, cultural, social y económico, el cual fue abruptamente truncado, tal como lo relata en su libelo y se ve reafirmado por la declaración de los testigos, detallada en el considerando quinto. Todo lo anterior con el objeto de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima de autos.

Que, asimismo, este tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan a las actoras en nada destierran el dolor y aflicción permanentes sufridos por estas, debido a las conductas ilícitas ya narradas, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, agentes del Estado quienes por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos.

En consecuencia, encontrándose acreditada la participación penal de los agentes del Estado que intervinieron en las detenciones y torturas del demandante, el Estado debe reparar el perjuicio ocasionado, cuya determinación concierne prudencialmente a este tribunal, toda vez que resulta imposible medir con exactitud la intensidad del sufrimiento provocado.

En atención a lo expuesto se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor del demandante don Gustavo Muñoz López, ascendente a la suma de \$100.000.000.- (cien millones de pesos).

**DÉCIMO SÉPTIMO.** Que, corresponde analizar a continuación el daño emergente demandado, en el cual se reclama la suma ascendente a \$3.500.000.-



«RIT»

Foja: 1

por concepto de tratamientos médicos y operaciones derivados de las torturas que padeció el demandante durante la prisión ilegítima. Sobre esto, cabe señalar que el daño emergente está constituido por el detrimento patrimonial efectivo que experimenta una persona. Su existencia importa, por lo tanto, un empobrecimiento real, esto es, la desaparición por obra del ilícito civil, de un bien que formaba parte del activo del patrimonio; al respecto y de los antecedentes médicos aportados a folio 56, los que no fueran objetados por la contraria, cabe señalar que estos corresponden a documentos emanados de terceros ajenos a este juicio, que no han comparecido en autos a reconocerlos y que no contienen los datos suficientes para determinar qué padecimientos físicos de los allí señalados, son efectivamente consecuencia de las torturas sufridas por el actor, ni tampoco contiene valores para determinar los posibles montos que ha debido desembolsar efectivamente el demandante para costear dichos tratamientos, por lo que dichas probanzas no tienen la entidad necesaria para tener por acreditados los daños reclamados a este respecto, entendiendo que el actor señaló en su libelo ya haber incurrido en dichos gastos, por lo que se espera un mínimo de certeza a este respecto.

**DÉCIMO OCTAVO.** Que, en cuanto a la indemnización demandada por concepto de lucro cesante, entendiendo éste como la pérdida de la ganancia, utilidad o beneficio que ordinaria, probable y razonablemente habría percibido la víctima del ilícito de no haber mediado su ocurrencia, podemos determinar que se requiere para su procedencia, de a lo menos dos elementos: la certeza en la existencia de un ingreso, ganancia o utilidad pecuniaria que se estaba percibiendo al momento de la ocurrencia del ilícito y de su prolongación en el tiempo de haber seguido con normal razonabilidad el curso de los hechos; y la relación de causalidad entre el injusto y la pérdida de dicha ganancia esperable.

Al respecto, el demandante alegó la imposibilidad de ejercer su profesión durante una serie de periodos de cesantía, ya sea en el país o durante el exilio, lo que sumaría un total de 134 meses de cesantía, con una remuneración promedio de USD\$6.500.-

Que, en la especie, este sentenciador no puede dar por establecidos dichos elementos constitutivos del lucro cesante, toda vez que de las probanzas aportadas por el actor a folio 56, consistente en 4 contratos de trabajo, no son antecedentes suficientes que sirvan como parámetro real para determinar el monto de ingresos que don Gustavo Muñoz López, sino que constituyen una mera expectativa, la que carece de toda certidumbre y razonabilidad, pretendiendo que



«RIT»

Foja: 1

durante el espacio de 134 meses, habría recibido una remuneración estable, invariable y cierta.

Es por lo anteriormente razonado que se desestimará lo pretendido a este respecto.

**DÉCIMO NOVENO.** Que, la sumas ordenadas, se pagaran reajustadas de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto, se acogerá la excepción deducida por la demandada. Respecto a los intereses legales, atendida la naturaleza declarativa del presente fallo, se devengarán desde la que la demanda se encuentre en mora de cumplir lo resuelto, acogiéndose también en este punto las defensas del Fisco.

**VIGÉSIMO.** Que, no habiendo resultado totalmente vencida, no se condenará a la demandada al pago de las costas.

Y, VISTO además lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes y 38° de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil Chileno; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123 y Ley N° 19.980; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27° y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, **SE RESUELVE:**

I.- Que se **RECHAZA** la excepción de reparación satisfactiva o pago al actor.

II.-. Que se **RECHAZA** la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil.

III.- Que se **RECHAZA** la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil.

IV.- Que se **RECHAZA** la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral debe considerar los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.





«RIT»

Foja: 1

**V.-** Que se **ACOGE** la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta a fojas 1, en contra del demandado Fisco de Chile, y se **CONDENA** a éste a pagar en favor del demandante don Gustavo Muñoz López la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos). -; y se **RECHAZAN** los montos solicitados por concepto de daño emergente y lucro cesante.

**VI.-** Que la suma indicada, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde que el Fisco incurra en mora y hasta el pago efectivo de la indemnización.

**VII.-** Que se **ACOGE** la alegación de improcedencia de pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

**VIII.-** Que **NO SE CONDENA** en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

Rol C-6101-2019

Dictada por Mauricio Vergara Vargas, Juez Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticinco de Marzo de dos mil veintidós**

